

RV: Apelación tutela STP6260-2022 Radicación N°. 123956

Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

Mar 31/05/2022 14:43

Para: Luisa Fernanda Garcia Tovar <luisagt@cortesuprema.gov.co>

Memorial de impugnación

Tutel 123956

De: Andres Felipe Peña Bernal <andresfp@coljuristas.org>

Enviado: martes, 31 de mayo de 2022 12:45 p. m.

Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Tramites Tutelas2 Despenal009 <despenal009tutelas2@cortesuprema.gov.co>; milly73@hotmail.com <milly73@hotmail.com>

Asunto: Apelación tutela STP6260-2022 Radicación N°. 123956

Honorable Magistrado Dr. Fernando León Bolaños Palacios
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Referencia: Impugnación acción de tutela STP6260-2022 Radicación N°. 123956

Accionante: Luz Mirian Castaño Quintero

Accionado: Sociedad de Acciones Especiales SAE-SAS

Luz Mirian Castaño Quintero, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de accionante y en ejercicio de lo consagrado en el artículo 31 de la Ley 2591 de 1991, obrando en el término establecido para tal fin, IMPUGNO la sentencia de primera instancia proferida por esta Corporación el 24 de mayo de 2022 y notificada el 25 de mayo del año en curso según escrito que adjunto.

Marinilla, 31 de mayo de 2022

Honorable Magistrado

Dr. Fernando León Bolaños Palacios

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Referencia: Impugnación acción de tutela STP6260-2022 Radicación N°. 123956

Accionante: Luz Mirian Castaño Quintero

Accionado: Sociedad de Acciones Especiales SAE-SAS

Luz Mirian Castaño Quintero, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de accionante y en ejercicio de lo consagrado en el artículo 31 de la Ley 2591 de 1991, obrando en el término establecido para tal fin, **IMPUGNO** la sentencia de primera instancia proferida por esta Corporación el 24 de mayo de 2022 y notificada el 25 de mayo del año en curso, por las razones que se exponen a continuación:

I. CONSIDERACIONES

1. La sentencia de primera instancia desconoce la doctrina constitucional sobre la inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela

Para declarar improcedente la tutela, la Sala Penal examinó los requisitos de tutela contra sentencia judicial, determinando que no se cumplía con el requisito de inmediatez, el cual exige que la acción de tutela debe ser interpuesta en un tiempo razonable -inferior a 6 meses-. Esto ya que la tutela fue interpuesta el 10 de mayo de 2022 y la sentencia por medio de la cual el Tribunal de Bogotá decidió extinguir el dominio de mi casa es del 4 de julio de 2019. Este término, considera la Sala Penal, no es razonable para cumplir con el requisito de inmediatez.

La jurisprudencia constitucional para verificar el requisito de inmediatez de la acción de tutela ha acudido al principio de razonabilidad y al principio de proporcionalidad y no solamente al término inferior a seis meses como erróneamente interpreta la Sala de Casación Penal. Así, la tutela no tiene un término de caducidad y es necesario analizar si el transcurso del tiempo es tan significativo que resulta desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, en casos de tutelas contra sentencias judiciales. Esto se ha establecido en las sentencias de la Corte

Constitucional T-797 de 2002, T-762 de 2003, T-812 de 2003, T-601 de 2004, y T-633 de 2004, entre otras.

De esta manera, conforme con la doctrina constitucional el juez tiene la obligación de analizar la inmediatez en el caso concreto y además ha establecido excepciones a la procedencia de la acción de tutela por falta de inmediatez. En la Sentencia T- 1028 de 2010 la Corte Constitucional clasifica las excepciones a la acción de tutela de la siguiente forma:

“(…) surtido el análisis de los hechos del caso concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de que una acción de tutela, que en principio parecería carente de inmediatez por haber sido interpuesta después de un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental, en realidad resulta procedente debido a las particulares circunstancias que rodean el asunto. Así, la jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos –por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede presentar:

- (i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
- (ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
- (iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Así las cosas, el juez de primera instancia omitió indagar sobre las circunstancias que rodearon la tutela y se limitó a motivar su decisión en el argumento según el cual la acción de tutela contra sentencia judiciales tiene un término de caducidad de seis meses. Por lo cual, se desconocen razones válidas para la inactividad en el caso en concreto y las condiciones de debilidad manifiesta de mi familia, que obligan al Estado a adoptar medidas diferenciales con base en el artículo 13 de la Constitución.

Así, considero que la Sala Penal debió al menos haber examinado las condiciones derivadas de las necesidades económicas, la condición de víctima del conflicto armado y el hecho ser madre cabeza de hogar, en quien recaen las labores de cuidado y manutención de mi hijo en condición de discapacidad, quien depende completamente de mí. La situación crítica derivada del

COVID-19 me ha convertido en migrante en Estados Unidos para solventar la situación. Además, si la orden de desalojo se concreta sería mi segundo desalojo forzado, porque también hemos sido víctimas de los grupos armados y la guerra.

Además, han existido barreras que no nos han permitido a mi y a mi familia acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Al respecto hay que tener en cuenta que una tutela contra una sentencia judicial, como la que decidió extinguir el dominio de mi casa, es un asunto complejo, técnico y propio de abogados sofisticados. En mi caso no tenía conocimiento que pudiera interponer una tutela contra la decisión de extinción de dominio, además dada mi situación económica ha sido muy difícil pagarle a un abogado y es excesivamente desproporcionado teniendo en cuenta todo lo que he tenido que soportar. Asimismo en el caso de mi hijo Jonatan Toro Castaño, dada su condición de discapacidad no le ha sido posible buscar por sí mismo a alguien que lo represente adecuadamente.

Solamente en la etapa de la diligencia de entrega mi familia contó con el acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas, quien apoya en la presente tutela que tiene como fin se cumplan con las garantías mínimas de derechos humanos establecidas por la Corte Constitucional y las Naciones Unidas para casos de desalojos forzados, que involucren personas de especial protección.

Es importante resaltar que la Comisión Colombiana de Juristas fue designada por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz para mi representación judicial en el Caso 01 “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP” de la JEP, por lo que su representación se limita a ese caso en la JEP y solamente pueden ayudar asesorandome, esto en su compromiso y solidaridad con las víctimas del conflicto armado.

2. La sentencia de primera instancia omite el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de personas con discapacidad y mujeres en situaciones de desalojos forzados

En la sentencia de primera instancia la Sala Penal advierte que no existe arbitrariedad en la actuación de la SAE-SAS y no se acredita un perjuicio irremediable. Así, advierte que si bien no hay duda que la medida de desalojo me afectará a mi y a mi hijo con discapacidad Jonatan Toro Castaño, no puede desconocerse que en la diligencia de desalojo el día 10 de mayo de 2022 se consideró lo siguiente:

“(…) se suspendió por solicitud del personero quien manifestó “se suspenda la diligencia de desalojo hasta tanto se tengan las garantías necesarias para la preservación de los derechos humanos de los ocupantes debido a que se encuentra una persona en condición de discapacidad certificada”

Y frente a lo anterior, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE anotó en el documento que suscribió incluso la accionante “(…) se ordena suspender la diligencia, pues los ocupantes solicitaron un tiempo, de un mes calendario, para proceder con la entrega del predio, y tener forma de organizar su salida, se deja de una vez para firma, fecha diligencia de entrega voluntaria, para el viernes 10 de junio de 2022 a las 9:00 a.m., (…)”

En tal sentido, se colige que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE en tal caso de llegar a adelantar la diligencia de desalojo del inmueble, ajustará el procedimiento a los protocolos que le permitan cumplir sus deberes legales de manera armónica con el imperativo de velar por la preservación de las medidas de bioseguridad en la realización eventual de desalojos y garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas, en especial aquellas en condición de vulnerabilidad, procurando, con la ayuda de las entidades territoriales, de ser necesario, que no queden en situación de desamparo durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria”.

A diferencia de lo considerado por la Sala Penal, se evidencia que la amenaza sobre los derechos humanos no ha desaparecido. Incluso la diligencia de entrega material sigue programada para el 10 de junio de 2022 y el acta de suspensión de la diligencia de desalojo (10 de mayo de 2022) señala que en caso que la tutela fuera negada debíamos abandonar la casa. Esto incluso sin aclarar si se respetará el derecho a la segunda instancia que se disputa en el presente recurso de apelación y la manera concreta cómo se garantizarán los derechos amenazados.

De esta manera, la decisión de tutela de la Sala Penal del 25 de mayo de 2022 concreta la consumación de un perjuicio inminente, urgente, grave e impostergable y mantiene la situación de zozobra y miedo que mi familia y yo debemos enfrentar. Así, nuevamente el día 10 de junio de 2022 tendremos que soportar las presiones ejercidas por la SAE-SAS para abandonar la casa.

Si bien la Sala Penal señala que en caso en que se llegará adelantar la diligencia de desalojo del inmueble, ajustará el procedimiento a los protocolos que le permitan cumplir con sus deberes legales, la Sala Penal no toma ninguna medida para garantizar esos derechos y se limita a declarar la tutela como improcedente. Esto a pesar que la misma acta de suspensión de la diligencia de desalojo (10 de mayo de 2022) señala que en caso que fuera negada la tutela debíamos abandonar la casa.

De esta forma, la Sala Penal omite cumplir con sus obligaciones de garantizar y respetar los derechos humanos, en especial en casos de personas de especial protección constitucional. También, la decisión concreta el perjuicio irremediable derivado del desalojo, sin tomar ningún tipo de acción para evitar que el desalojo ocurra. En fin, la Sala Penal a mí y a mi familia nos dejó desprotegidos.

II. SOLICITUD MEDIDA PROVISIONAL

Teniendo en cuenta que el acta de suspensión de la audiencia del 10 de mayo de 2022, señala que en caso que la tutela fuera negada yo y mi familia debíamos desalojar la casa el día 10 de junio 2022, solicito al honorable juez de segunda instancia declarar que:

1. Comunicar a la SAE-SAS que la decisión de declarar improcedente la tutela no debe interpretarse como negación a los derechos, ni como una orden de desalojo, sino que el desalojo forzado debe cumplir con los requisitos exigidos para casos de desalojos forzados según lo establecido por los derechos humanos.

2. Se suspenda la diligencia de desalojo programada para el día 10 de junio de 2022, hasta tanto no se tomen las medidas efectivas para garantizar los mínimos establecidos en las garantías de derechos humanos para casos de desalojos forzados.

La anterior solicitud se realiza según el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, que señala que desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

III. CONCLUSIÓN

Por las razones anteriores, teniendo en cuenta que se están vulnerando mis derechos a la vivienda digna y al mínimo vital y que la tutela es el mecanismo idóneo para su protección, solicito a su superior jerárquico revocar la sentencia de primera instancia del 24 de mayo de 2022 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, ordene proteger los derechos que están siendo vulnerados.

IV. NOTIFICACIONES

Como accionante recibiré notificaciones en la Cl 21 #46ª-89, ciudadela artesanal, Marinilla Antioquía. También en el correo electrónico milly73@hotmail.com y en el celular 3197615063.

V. ANEXOS

- Acta de suspensión de la diligencia de entrega de fecha 10 de mayo de 2022.
- Tutela de primera instancia del 24 de mayo de 2022 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Cordialmente,



Luz Miriam Castaño Quintero

c.c 43.449.476



Acta Diligencia de Desalojo

F-DP2-196-Versión 1-11/07/2017

DILIGENCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE INMUEBLE RESOLUCIÓN N° 452 DEL 24 DE ABRIL DE 2019

En el municipio de marinilla, Antioquia, a los diez (10) días del mes de mayo del año 2022, se realiza entrega voluntaria del Folio de matrícula inmobiliaria número 018-93819, ubicado en Calle 21 N° 46ª-89, en el Municipio de Marinilla, Antioquia; la Sociedad de activos especiales, identificada con NIT 900.265.408-3, con matrícula mercantil No. 01919219 de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sociedad por Acciones Simplificada, de economía mixta, del orden Nacional, de naturaleza única, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al régimen de derecho privado, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante Escritura Pública Número 204 del 6 de febrero de 2009 otorgada en la Notaría Sexta del Circulo de Pereira, sociedad que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014, obra en el presente acto como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –FRISCO y mediante el Parágrafo 3° del Artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, el cual establece que el administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, tendrá la facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes que se encuentren bajo su administración, en tal virtud las autoridades de Policía locales, municipales, departamentales y nacionales, estarán obligadas a prestar, de manera preferente y sin dilación injustificada, el apoyo que requiera el representante legal o su delegado, para hacer efectiva la administración de los bienes que ingresan al FRISCO.

De conformidad con lo manifestado anteriormente la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., se encuentra en la capacidad de ejercer directamente la Función de Policía Administrativa, objeto de delegación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, y en consecuencia por conducto de sus funcionarios puede ejecutar los actos tendientes a la entrega real y material de los bienes que ingresan al FRISCO, debido a ello por medio de Resolución 167 del 14 de febrero de 2022, al funcionario Joan Camilo Villa Z, identificado con cédula de ciudadanía 8.061.850, se le faculta para ejecutar los actos que se expidan tendientes a la entrega real y material de los bienes que ingresan al FRISCO, el inmueble ubicado en la Calle 21 N° 46ª-89, en el Municipio de Marinilla, Antioquia con Folio de matrícula inmobiliaria número 018-93819, del círculo registral de Marinilla, de Antioquia.

Proceden a dar apertura a la presente diligencia de Entrega Real y Material en el inmueble, identificado con el **FMI No 018-93819**, registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de marinilla, inmueble (predio) que se encuentra debidamente identificado.

Encontrándonos presentes en el inmueble objeto de la diligencia los ocupantes, Sebastián Toro Castaño identificado con cedula de ciudadanía No. 12036956124, Jonathan Toro Castaño identificado con cedula de ciudadanía No. 1038408231, ELDER JULIAN TORO CASTAÑO, Cedula 1038410170, quienes manifiestan que la señora LUZ MIRIAM no se encuentra en el país, parte de la personería, el personero Rodrigo Andrés Echeverry identificado con cedula de ciudadanía No. 71269597, por parte de la secretaria de gobierno el Subsecretario de seguridad orden y justicia Daniel Castrillón Álvarez identificado con cedula de ciudadanía No. 1038410261, por parte de la Secretaria de familia el secretario de familia Leonardo de Jesús Orozco Giraldo identificado con cedula de ciudadanía No. 70901046, por parte de la secretaria de salud la psicóloga Ubely María Ramírez Gonzales identificada con cedula de ciudadanía



No. 21481438, por parte de la comisaria de familia el doctor Juan Fernando Martínez Giraldo identificado con cedula de ciudadanía No. 70909174.

Siendo las 9:00 am nos presentamos en el predio el procedemos con el ingreso, Se concede el uso de la palabra a cada una de las partes convocadas para que se pronuncien dentro de la diligencia.

OCUPANTES:

Los ocupantes solicitan tiempo para hacer la entrega material del inmueble para ellos poder organizarse, debido a que ellos se dedican al arte y no cuentan con los recursos para radicarse en otra parte, que si es posible que se le suministre una vivienda para ellos vivir lo agradecerían, también manifiestan que presentaron acción de tutela el día 06 de mayo de 2022 la cual fue remitida a la corte suprema de justicia sala penal el día 09 de mayo de 2022. (acción de tutela que se anexa al acta) por parte del juzgado primero penal de marinilla, quienes se declaran impedidos para resolver la acción, y remiten para conociemito de la corte; tal como lo enseñan en diligencia, pues la SAE, no había sido notificada oficialmente.

Además, manifiestan respecto a la existencia de otros predios a nombre de su mamá, ellos manifiestan que tales predios fueron vendidos en pandemia y que ya nos les pertenecen a ellos.

Manifiestan que los predios que están ubicados en el Carmen de Viboral y Rionegro están en trámite de materializar la venta.

PERSONERÍA:

El personero, manifiesta lo siguiente: el personero solicita que se suspenda la diligencia de desalojo hasta tanto se tengan las garantías necesarias para la preservación de los derechos humanos de los ocupantes debido a que se encuentra una persona en condición de discapacidad certificada y hasta que se resuelva la acción de tutela interpuesta por los ocupantes, quienes además son personas victimas del conflicto armado, (aporta certificado de VIVANCO), y correo electrónico y certificación de discapacidad del ocupante.

SECRETARÍA DE SALUD:

Desde la secretaria se acompaña la diligencia, sostiene que esta de acuerdo con lo conversado y por su parte se realizará la verificación de los programas en los que se pueda vincular a los ocupantes si es del caso, en especial a Jonathan toro, que cuenta con una discapacidad certificada.

SECRETARIA DE FAMILIA

Esta de acuerdo con la solicitud del personero de aplazar la diligencia, y van a mirar con detalle la caracterización que realizaron, para poder mirar las posibilidades que tenga el municipio para ellos, en caso que ellos no tengan para donde irse.

SECRETARIA DE GOBIERNO

El subsecretario manifiesta, que esta de acuerdo con lo manifestado y coadyuba la solicitud de suspensión de la diligencia.

COMISARIA DE FAMILIA

Manifiesta estar de acuerdo con la solicitud que hace el personero, y así verificar las garantías que se le puedan otorgar a esta familia por medio de los programas que tenga la alcaldía y que puedan aplicar.

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.

Una vez escuchadas las intervenciones de los entes garantes de la diligencia, del ministerio público y demás intervinientes, esta entidad se permite informar lo siguiente:

La sociedad de activos especiales da respuestas a las inquietudes y manifiesta que dio respuesta a la señora LUZ MIRIAM del derecho de petición, donde se informó sobre la imposibilidad de realizar contratos para continuar ellos con su ocupación, por las razones expuestas en dicha misiva.

También se les informa en respuesta a la afirmación de no tener un lugar donde ir, que en búsquedas de bases de datos se evidencia que la afectada, cuenta con cuatro predios registrados en el VUR, con matrículas 018-149089, 020-70369, 020-188704 y 020-172969, en respuesta afirman que esos bienes son de la madre y que están pendiente de venta, que son bienes no les sirven para habitarlos.

En atención que el dialogo entre las partes, se propuso por parte de la personería, suspender la diligencia, hasta tanto se resuelva de fondo la tutela presentada, pese a que no se dicto una medida cautelar que la suspendiera, las demás autoridades presentes sostienen que se suman al argumento y que analizaran desde sus competencias que mas programas o acciones se les puede brindar a los ocupantes en especial a Jonathan toro.

Por parte de la SAE, y escuchas los argumentos se ordena suspender la diligencia, pues los ocupantes solicitaron un tiempo, de un mes calendario, para proceder con la entrega del predio, y tener forma de organizar su salida, se deja de una vez para firma, fecha diligencia de entrega voluntaria, para el viernes 10 de junio de 2022 a las 9:00 am., en caso tal que la tutela no sea decidida en su favor.

Se suspende la diligencia siendo las 11:30 am y queda a firma de los asistentes.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal
Sala de Decisión de Tutelas n.º 1

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
Magistrado Ponente

STP6260-2022

Radicación N.º 123956

Acta No. 112.

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022).

I. ASUNTO

1. Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela presentada por LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO, contra la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, en

el proceso de Extinción de Dominio adelantado en su contra radicado con número 05000312000120160000801.

Al trámite constitucional fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado De Extinción de Dominio de Antioquia, el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Marinilla (*Antioquia*), la Fiscalía General de la Nación, y a las demás partes e intervinientes dentro de los procesos 05000-31200-01-2016-00008 y 05440-60003-40-2011-00020.

II. HECHOS

2. De lo afirmado por LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO, en su demanda escrito de tutela, y de la documentación allegada, se logró extraer lo siguiente:

-. Es madre cabeza de familia, su hijo Jonatan Toro Castaño en condición de discapacidad depende de ella y desde hace aproximadamente 15 años habita con sus 3 hijos en Marinilla (*Antioquia*), no tiene antecedentes penales y no ha contribuido a que en su hogar se cometan actividades ilícitas.

-. El 12 de mayo de 2011, en su inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819, ubicado en la Calle 21 No. 46 A-89 del Municipio de Marinilla, fueron hallados

421 gramos de marihuana, los cuales, fueron adquiridos por su hijo Elder Julián Toro Castaño, para el consumo personal.

-. El 19 de septiembre de 2011, el Juzgado Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Marinilla (*Antioquia*), declaró penalmente responsable a Elder Julián Toro Castaño de la conducta de *tráfico, fabricación o porte de estupefacientes*, en la modalidad “*conservar*”, le impuso la pena de 32 de meses y multa de un (1) *smlmv*; y le concedió la suspensión de la ejecución de la pena. Decisión contra la que se interpuso recursos.

-. Por los anteriores hechos, el 31 de octubre de 2012, la Fiscalía General de la Nación de manera oficiosa inició el trámite de extinción del derecho de dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819.

-. El 24 de julio de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, resolvió “**PRIMERO:** *No declarar la extinción del derecho de dominio del inmueble con matrícula inmobiliaria 018-93819 (...)* **SEGUNDO:** *Ordenar la cancelación de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo decretadas por la fiscalía sobre el bien inmueble (...)*”

-. El 4 de julio de 2019, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, a través del grado jurisdiccional de consulta, revocó la sentencia proferida el 24 de julio de 2017, por el Juzgado Primero Penal del Circuito

Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, y (i) declaró la extinción del derecho de dominio sobre todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del inmueble ubicado en la calle 21 No. 46 A-89 del Municipio de Marinilla e identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819, y (ii) ordenó la tradición del bien a favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación, inversión social y Lucha contra el Crimen Organizado (FISCO).

- El Tribunal argumentó que no cumplía con las condiciones para ser considerada como madre cabeza de familia *“desconociendo que yo tenía el deber de proveer con los recursos necesarios para la sostenibilidad de mis hijos, teniendo que cumplir con extensas jornadas de trabajo y a la vez velar por su cuidado, y a su vez, basado en un estereotipo, redujo el rol de crianza, protección, educación y afecto del padre a la simple comunicación sobre mis hijos, sin prueba suficiente lo asumió como una crianza responsable, desconociendo que la misma debe ser compartida y en términos de igualdad entre padre y madre.”*

- La Sala de Extinción de Dominio sustentó su decisión con argumentos basados en *“prejuicios y estereotipos de género, acentuó los patrones socioculturales sobre el deber ser de la mujer y sus roles tradicionales”*. El estado *“no garantizó una tención diferencial, de acuerdo con mis necesidades como sujeto de especial protección al cuidado de un niño con*

capacidades diversas, que requería suministro de servicios sociales para apoyar las labores del cuidado.”

-. En razón a este hecho “arbitrario” está siendo obligada, junto con su familia, a desalojar de manera forzada su casa, único lugar con el que cuentan para vivir. La Sociedad de Activos Especiales le entregó a su hijo en condición de discapacidad una carta “*Solicitud de Entrega Voluntaria*” en la que le solicitó entregar el inmueble el 20 de marzo, so pena de iniciar un proceso de desalojo forzado o denuncia penal.

-. El 28 de marzo de 2022 radicó en la Sociedad de Activos Especiales un derecho petición en el que solicitó que se abstuviera de realizar cualquier procedimiento o diligencia, hasta tanto, se garantizara los derechos de su hijo con discapacidad, también solicitó que le informaran si para realizar el desalojo han tenido en cuenta la condición especial que padece su hijo, y le indicaran cuáles eran las etapas de dicho trámite.

-. La Sociedad de Activos Especiales el 5 de mayo de 2022 le informó que el desalojo se realizaría el siguiente 10 de mayo, sin ellos tener a dónde ir y sumado a su difícil situación económica producto de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19.

3. En consecuencia, solicita se ordene a la Sociedad de Activos Especiales que la proteja en su condición de madre cabeza de hogar, y a su hijo Jonatan Toro Castaño, quien depende de ella, y les garantice, el respeto de todas las garantías procesales previstas en el derecho de los derechos humanos, incluyendo: *“a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.*

De igual modo, peticiona que se ordene a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE., suspender la diligencia de desalojo y el procedimiento, hasta tanto se garanticen las medidas para proteger los derechos de su hijo Jonatan Toro Castaño en condición con discapacidad y sus derechos como mujer cabeza hogar.

III. ACTUACIÓN PROCESAL Y RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS

4. Con auto del 12 de mayo de 2022, esta Sala de Tutelas avocó el conocimiento y dio traslado a las accionadas y vinculados a efectos de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. Tal proveído fue notificado por Secretaría el pasado 18 de mayo.

5. La Sala accionada y los vinculados expusieron lo siguiente:

5.1 La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE., luego de aludir a sus funciones de policía administrativa, a la improcedencia de la tutela y falta de competencia, expuso que, el 10 de mayo, en compañía de los entes garantes, personería , secretaria de gobierno, familia, salud , comisaria de familia, y el funcionario designado para la recuperación del predio, se presentaron en el inmueble para ejecutar la recuperación, en el sitio fueron atendidos por los hermanos toro, y la psicóloga de la corporación de derechos humanos que los apoya en su defensa, la señora LUZ MIRIAM , no se encontró en la diligencia, sus hijos manifestaron que se encontraba trabajando en EEUU.

Explicó que, por parte de la personería municipal, se solicitó suspender la diligencia hasta tanto los ocupantes tengan un lugar donde ir, pues dicen desconocer los demás bienes que tiene la progenitora, además de sustentar la

dificultad del señor Jonatan toro, quien tiene una discapacidad de movilidad.

Manifestó que, no se han vulnerado los derechos que la tutelante invocó, pues, todas las acciones que se han adelantado, han estado ejercidas dentro del marco del debido proceso, la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales de los afectados con las medidas judiciales decididas y ejecutoriadas.

Destacó que se logró demostrar que la familia cuenta con recursos o bienes inmuebles donde pueden disponer su habitación, además que la señora LUZ MIRIAM labora según afirmaron sus hijos en diligencia de desalojo, en los EE. UU y aporta el sustento de la familia, que los señores Julián, y Sebastián son independientes, artistas y dj de música, que el único que cuenta con condición especial es Jonatan toro, quien es mayor de edad y tiene una discapacidad de movilidad.

5.2 La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, destacó que, se vislumbra que la demandante no atribuye de forma puntual y directa a esa Corporación, la presunta vulneración de los derechos fundamentales que reclama, como quiera que sus pretensiones finales las dirige de manera clara y específica contra las actuaciones administrativas que ha desarrollado la Sociedad de Activos Especiales -SAE- en aras de obtener el desalojo del inmueble.

Agregó que, en la decisión de segunda instancia que anexa, a lo largo del acápite considerativo de dicho proveído, se consignaron las razones fácticas y jurídicas por las cuales la Sala concluyó que debía revocarse el fallo de primera instancia y entrar a decretar la extinción de dominio sobre el bien propiedad de LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO, teniendo en cuenta la valoración íntegra de la totalidad de los medios probatorios aducidos legal y oportunamente al proceso.

5.3 El Procurador 30 Judicial, adujo que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, por cuanto, mediante sentencia del 24 de Julio del 2017, el juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, resolvió que no procedía la Extinción del Dominio del inmueble objeto de inconformidad; empero, mediante providencia del 4 de Julio del 2019, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, revocó la decisión. En consecuencia, se está atacando una decisión que data del año 2019.

5.4 El Juzgado Penal del Circuito de Marinilla, dio cuenta que, profirió sentencia condenatoria en contra de Elder Julián Toro Castaño, tras declararlo penalmente responsable de la conducta punible de tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes (*Art.376 Inc.2 del CP*) en calidad de autor, en la modalidad conservar, y lo condenó a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión y el equivalente en pesos a un (1) salario mínimo legal mensual de multa; le concedió el beneficio de la suspensión

condicional de la ejecución de la pena.

5.5 El director Jurídico del Ministerio de Justicia y Del Derecho solicitó negar el amparo constitucional deprecado teniendo en cuenta que por la acción u omisión de esa Cartera no se afectó ningún derecho fundamental de la parte accionante.

5.6 La Caja de Compensación Familiar de Antioquia informó que no presenta interés alguno en la propiedad ubicada en la Calle 21 No. 46A – 89, Barrio Ciudadela, Marinilla, Antioquia, en cuanto, a la fecha, no existen créditos pendientes de pago a cargo de la señora LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO.

5.7 La Fiscalía 094 Delegada expuso que corresponde a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE., atender los reproches de la accionante CASTAÑO QUINTERO.

5.8 La coordinadora de la Unidad De Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación, adujo que no ha vulnerado derecho alguno a la accionante.

5.9 El Fiscal 34 adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, destacó que es resorte de la accionada, como secuestre del estado, pronunciarse sobre las pretensiones de la ciudadana LUZ MIRIAM.

6. Los demás vinculados guardaron silencio¹.

IV. CONSIDERACIONES

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015², la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela promovida por LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO, que se dirige contra la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.

8. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.

¹ Para la fecha de entrega del proyecto al despacho no se advirtieron respuestas adicionales.

² Decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho.

9. Han de recordarse, para la solución del caso, los requisitos de procedencia de la acción de amparo contra providencias judiciales³.

9.1 Tales requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales contemplan, que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Además, que se hayan agotado todos los medios – ordinarios y extraordinarios – de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

9.2 Igualmente, exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, el cual impone que la tutela se haya instaurado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

9.3 Además, que el accionante *«identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración*

³ «En el marco de la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.» (T-343/12).

*en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible*⁴.

Y finalmente, que no se trate de sentencias de tutela.

9.4 De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de la sentencia C-590/05. Estos son: (i) defecto orgánico⁵; (ii) defecto procedimental absoluto⁶; (iii) defecto fáctico⁷; (iv) defecto material o sustantivo⁸; (v) error inducido⁹; (vi) decisión sin motivación¹⁰; (vii) desconocimiento del precedente¹¹; y (viii) violación directa de la Constitución.

9.5 Desde la decisión CC C-590/05 ampliamente referida, la procedencia de la tutela contra una providencia emitida por un juez de la República se habilita, únicamente, cuando superado el filtro de verificación de los requisitos generales, se configure al menos uno de los defectos específicos antes mencionados.

9.6 De manera específica, en relación con la *decisión sin motivación*, la jurisprudencia constitucional ha señalado que *“una autoridad judicial incurre en una decisión sin*

⁴ Ibidem.

⁵ “que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello”.

⁶ “cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido”.

⁷ “cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.

⁸ “se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”.

⁹ “cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”.

¹⁰ “que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.

¹¹ “cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”.

motivación y, por consiguiente, desconoce el derecho fundamental al debido proceso de una persona, cuando la providencia judicial (i) no da cuenta de los hechos y los argumentos traídos por los sujetos vinculados al proceso, particularmente cuando resultan esenciales para el sentido de la decisión (ii) no justifica el motivo por el cual se abstiene de pronunciarse sobre ciertos temas o (iii) los despacha de manera insuficiente, bajo consideraciones retóricas o en conjeturas carentes de sustento probatorio o jurídico alguno”¹².

10. En el presente evento, LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO, actuando en nombre propio, en representación de su hijo Jonatan Toro Castaño reclama el amparo de sus derechos fundamentales, los cuales estima afectados por la decisión de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y el proceder de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE de ordenar el desalojo del inmueble de su propiedad ubicado en calle 21 No. 46 A-89 del Municipio de Marinilla e identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819, donde reside con sus 3 hijos, uno de ellos en condición de discapacidad.

11. Lo primero que debe advertir la Sala, es que se acreditó, que existe una sentencia en firme que declaró la extinción de dominio en favor del Estado, dado que, el 4 de julio de 2019, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, a través del grado jurisdiccional de consulta, revocó la sentencia proferida el 24 de julio de 2017,

¹² CC sentencia T-709 de 2010, reiterada en la T-041 de 2018

por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, y (i) declaró la extinción del derecho de dominio sobre todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del inmueble ubicado en la calle 21 No. 46 A-89 del Municipio de Marinilla e identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819, y (ii) ordenó la tradición del bien a favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación, inversión social y Lucha contra el Crimen Organizado (FISCO).

12. Ahora, si bien la accionante no petitionó dejar sin efectos la decisión proferida el 4 de julio de 2019, por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, si reprochó los argumentos en que fundamentó su providencia, la que valga decir, originó la actuación de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE de quien indica para realizar el trámite de desalojo debe tener en cuenta la condición de discapacidad de su hijo Jonatan Toro Castaño.

13. En tal sentido, lo primero a precisar es que los reproches de la demandante para cuestionar la decisión adoptada dentro del proceso de extinción de dominio n° 05000-31200-01-2016-00008 no tiene vocación de prosperar, porque la demanda no cumple con la *inmediatez* como requisito general de procedencia de la acción de tutela, pues LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO debía acudir a la acción de tutela en un plazo razonable -inferior a 6 meses- a partir de la fecha en que fue proferida la sentencia que puso

fin al proceso de extinción de dominio, emitida el 4 de julio de 2019, lo cual no sucedió, en tanto la acción de tutela fue interpuesta el 10 de mayo de 2022, lo que no resulta ser un tiempo razonable.

14. En todo caso, de superarse este requisito, tampoco se advierte arbitrariedad en la actuación de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, pues su proceder, tiene sustento en los deberes que tiene como administradora del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado “FRISCO” y las facultades de policía administrativa que le han sido reconocidas en la ley 1849 de 2017 (*Por medio de la cual se modifica y adicional la Ley 1708 de 2014 –Código de Extinción de Dominio, y se dictan otras disposiciones-*), que modificó el párrafo tercero¹³ del artículo 91 de la ley 1708 de 2014 (*Por medio de la cual expide el Código de Extinción de Dominio*), otorgando de forma directa la facultad de policía administrativa al administrador del FRISCO, la S.A.E, como se evidencia a continuación **“El administrador del Frisco tendrá la facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes que se encuentren bajo su administración.”**

¹³ De igual forma, por razones de seguridad y defensa, o por necesidades del servicio, sin afectar los porcentajes previstos en el inciso primero del presente artículo, se podrán destinar de forma directa y definitiva predios urbanos y rurales, extintos, por parte del administrador del Frisco al Ministerio de Defensa Nacional, o al Ejército Nacional, o a la Armada Nacional, o a la Fuerza Aérea Colombiana, o a la Policía Nacional, para el desarrollo de proyectos de infraestructura de la Fuerza Pública y/o para el cumplimiento de sentencias judiciales, para la reubicación, movilización o traslado de las instalaciones destinadas a la Defensa y Seguridad, lo anterior previos estudios técnicos del Ministerio de Defensa.

15. De otra parte, aunque no hay duda que esta medida afectará a los hijos de la accionante y en especial a su hijo Jonatan Toro Castaño, sujeto de especial protección, dada su condición de discapacidad acreditada, no puede desconocerse que conforme al acta de *“diligencia de entrega real y material del inmueble resolución No. 452 del 24 de abril de 2019”* que allegó la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, la diligencia del 10 de mayo de 2022, se suspendió por solicitud del personero quien manifestó *“se suspenda la diligencia de desalojo hasta tanto se tengan las garantías necesarias para la preservación de los derechos humanos de los ocupantes debido a que se encuentra una persona en condición de discapacidad certificada”*

Y frente a lo anterior, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE anotó en el documento que suscribió incluso la accionante *“(...) se ordena suspender la diligencia, pues los ocupantes solicitaron un tiempo, de un mes calendario, para proceder con la entrega del predio, y tener forma de organizar su salida, se deja de una vez para firma, fecha diligencia de entrega voluntaria, para el viernes 10 de junio de 2022 a las 9:00 a.m., (...)”*

En tal sentido, se colige que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE en tal caso de llegar a adelantar la diligencia de desalojo del inmueble, ajustará el procedimiento a los protocolos que le permitan cumplir sus deberes legales de manera armónica con el imperativo de velar por la preservación de las medidas de bioseguridad en la realización eventual de desalojos y

garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas, en especial aquellas en condición de vulnerabilidad, procurando, con la ayuda de las entidades territoriales, de ser necesario, que no queden en situación de desamparo durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria.

16. En síntesis, constatado el desconocimiento e incumplimiento del requisito de inmediatez y no haberse acreditado un perjuicio irremediable, lo procedente será declarar la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


V. RESUELVE:

1°. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO.

2. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

anal@2022



JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria